Buenos Aires, 7 de junio de 2004

Ref. Expte. N° 6720/ P.P.

Y VISTO:

El incidente acaecido el 28 de mayo ppdo. en el Pabellón 5 del Módulo V del Complejo Penitenciario Federal II.

Y RESULTA:

Que el día 28 de mayo ppdo. se recibieron en este Organismo varios llamados telefónicos de internos alojados en el sector apuntado anteriormente, que daban cuenta que varios de ellos habían sido golpeados por agentes penitenciarios durante un procedimiento de requisa de las instalaciones, que se había llevado a cabo en horas de la mañana.

Que el día sábado 29 de mayo un profesional médico de esta Procuración junto a un asesor letrado fueron destacados por el suscripto al establecimiento para entrevistar a los internos, así como para constatar las lesiones. De los dichos de once internos -de la totalidad de los que fueron entrevistados- surge que durante el procedimiento de requisa realizado en la mañana del viernes, los agentes penitenciarios encargados de la maniobra habrían ingresado al sector de usos múltiples del pabellón con elementos contundentes y habrían procedido, mediante violencia física, que involucró golpes e insultos, a someter a la población al registro.

Que el empleo de la fuerza física por parte de la administración penitenciaria quedó acreditada por el resultado de la evaluación clínica del galeno de este Organismo, quien corroboró en varios internos eritremas, hematomas, contusiones, escoriaciones, y otros signos de golpes.

Que el Director del Módulo V, Alcaide Mayor D. Roberto B. Riquelme, brindó su opinión en cuanto a que había sido un procedimiento de rutina, en el que hubo incidentes, debido al nocivo papel protagónico que tienen algunos de los internos alojados en el sector.

Y CONSIDERANDO:

Que el artículo 77 de la ley 24.660 establece: "Al personal

penitenciario le está absolutamente prohibido emplear la fuerza en el trato con los internos, excepto en los casos de fuga, evasión o de sus tentativas o de resistencia por la fuerza activa o pasiva a una orden basada en norma legal o reglamentaria. Aún en estos casos, todo exceso hará pasible al responsable de las sanciones administrativas y penales que correspondan”.

El precepto instituye un principio rector por el cual se erradica el empleo de la fuerza, en la relación entre personal penitenciario y los internos, la que deberá basarse en la persuasión y en la convicción de la legalidad. Con criterio realista, no obstante, se permite el empleo de la fuerza en carácter excepcional para supuestos taxativamente predeterminados.

Concordantemente, el artículo siguiente sólo autoriza el empleo de armas reglamentarias en circunstancias excepcionales a efectos de prevención o por peligro inminente para la vida, la salud o la seguridad de los agentes, de internos o de terceros.

No obstante la claridad de las normas señaladas, desde este Organismo se viene denunciando a través de diversos modos lo que se ha dado en llamar “la cultura del golpe”. En muchas oportunidades, esta gestión ha debido impetrar formalmente denuncias penales por apremios ilegales al corroborar el uso de la fuerza, sin justificativo legal, muchas veces también, al constatarse el exceso en el empleo de este medio de sometimiento, específicamente proscripto por las normas.

Es cierto que no todas las denuncias prosperan en sede jurisdiccional, lo que se explica por la dificultad probatoria. Es dable destacar en tal sentido, el problema que significa -para un interno- presentarse como testigo de hechos de esta naturaleza. La mayoría de las veces, los internos denunciados y/o testigos deben reintegrarse al mismo establecimiento en que ocurren los hechos, desalentando la declaración en la instancia judicial, a pesar del alegado “control jurisdiccional” sobre las cárceles, que se traduce en la realidad de los hechos y la mayoría de las veces en una vigilancia meramente formal. Está claro que las intimidaciones, amenazas y golpes hacen desistir de la denuncia. Como tiene dicho este Organismo, resulta muy normal que los internos absorban cualquier mecanismo represivo y que acepten ciertas “reglas de juego” impuestas porque en definitiva son ellos los que deben lidiar con el problema del maltrato.

Dentro de un establecimiento penitenciario, la persona privada de la libertad, vela por su bien máspreciado que es la propia vida, lo que involucra la integridad psicofísica, cuyo resguardo se intenta a través de mandas judiciales, sin resultado cierto, debido a aquello que se ha dicho de la cárcel como “un espacio sin ley”.

También resulta difícil la individualización de la responsabilidad administrativa o penal ya que en contravención a lo prescripto reglamentariamente los agentes penitenciarios no usan identificación visible.

Otra razón por la cual no progresan las investigaciones en el fuero penal, está en la entidad de las lesiones provocadas cuando

ellas no son serias y sus secuelas tales como marcas, devienen tenues y/o desaparecen a los pocos días. Se trata en estos casos del uso de la fuerza como "castigo disciplinador" para recordar quien se encuentra a cargo.

En el incidente del 28 de mayo en el Pabellón 5 del Módulo V del Complejo Penitenciario Federal II, la administración penitenciaria incumplió las normas legales en vigencia, específicamente en lo que refiere al uso de la fuerza. La ponderación de los elementos recogidos en el lugar llevan al suscripto a la íntima convicción de que hubo violencia desmedida e injustificada; esta evaluación involucra también la estimación sobre la imposibilidad de acreditar fácticamente esta certeza en un estrado judicial. Es así que las razones invocadas precedentemente, en lo que respecta a la cuestión probatoria, impiden al suscripto cumplir con el deber legal del artículo 177 inciso 1º del Código Procesal Penal de la Nación, pero no enervan la potestad otorgada expresamente por el artículo 23 de la ley 25.875, de formular a la autoridad penitenciaria, con motivo de las investigaciones practicadas, advertencias y recordatorios de los deberes legales y funcionales.

Esta claro que corresponde propiciar al Director Principal del Complejo Penitenciario Federal II, que imparta directivas a los agentes penitenciarios a su cargo recordándoles la prohibición del uso de la fuerza en el trato con los internos salvo en los excepcionalísimos y taxativos supuestos establecidos por ley.

Que es objetivo de esta Procuración Penitenciaria la protección de los derechos humanos de los internos comprendidos en el Régimen Penitenciario Federal (conforme art. 1 de la Ley 25.875).

Por todo ello,

EL PROCURADOR PENITENCIARIO

RESUELVE:

- 1) Recomendar al Director Principal del Complejo Penitenciario Federal II, que imparta directivas al personal penitenciario a su cargo recordándoles la prohibición del empleo de la fuerza en el trato con los internos salvo en los excepcionalísimos y taxativos supuestos establecidos en las previsiones del artículo 77 de la Ley 24.660
- 2) Poner en conocimiento del Sr. Ministro de Justicia, de Seguridad y de Derechos Humanos la presente recomendación.
- 3) Poner en conocimiento del Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de Morón la presente recomendación.
- 4) Regístrese y archívese.

RECOMENDACION N° 484/P.P./04.